

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México, por Calixto Perez, contra la resolución del C. gobernador del Distrito que lo expulsó del país como extranjero pernicioso.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El Promotor que suscribe en el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito, por el súbdito español Calixto Perez que considera violadas en su persona varias garantías individuales de las que se otorgan en la sec. 1ª del tít. 1º de la Constitución general, supuesto el estado de los autos que es el de alegar y haciéndolo en la forma prescrita por la ley, dice: que la justificación de vd. se ha de servir declarar en definitiva que contra la determinación ó acto reclamado de la autoridad que dispuso la expulsión del territorio nacional del expresado español Calixto Perez no cabe el recurso de amparo por las razones que pasa brevemente á exponer.

El quejoso alega como punto fundamental de todos sus razonamientos para que se le otorgue el amparo, dos circunstancias principales; cuales son: que está naturalizado en la República y que para haberse acordado su salida del territorio no se instruyó la correspondiente causa para que se le impusiera esa pena propiamente dicha que solo es exclusivamente propia la facultad de imponerla de la autoridad judicial conforme al art. 21 de la Constitución.

La calidad de ciudadano mexicano ha pretendido comprobarla el quejoso con una partida de casamiento y una certificación del general Belendez aduciendo además la prueba testimonial que obra en ambas; pero la condición de ciudadano no se comprueba sino con los documentos respectivos de las autoridades Supremas bien de los Estados ó de la Federación ante quien se haya pedido

y otorgado la carta de ciudadanía, y tal documento no se ha presentado sin embargo del tiempo de que ha podido disponer el quejoso para exhibirlo, de manera que ni siquiera la patente de oficial del ejército mexicano en el que se dice prestó sus servicios se ha presentado; y por consecuencia la prueba careciendo de los requisitos indispensables que las leyes exigen para este caso no existe, y debe reputársele extranjero como lo ha considerado la autoridad competente que expidió el pasaporte para que se le extrañara de la República.

Que no se llenaron las fórmulas y la tramitación de un juicio en los términos que expresa el art. 20 de la Constitución para haber acordado su expulsión es la otra razón capital en que se apoya la solicitud del amparo. En cuanto á esto el que suscribe ha fijado muy especialmente su atención en el texto expreso y literal de art. 33 de la Constitución en el que se dicen estas palabras terminantes: *salva en todo caso la facultad* que tiene el gobierno para expeler al extranjero pernicioso. Es decir que para acordarse la expulsión de un extranjero basta que el gobierno lo considere conveniente en virtud de los informes que tenga para considerarlo pernicioso como puede cualquier padre de familia prohibirle la entrada de su casa á la persona que no le convenga que la visite ó permanezca en ella.

Esta regla es de un uso tan racional que los gobiernos aun ejercen la facultad de despedir á los agentes diplomáticos y consulares del territorio de la nación con solo hacer algunas indicaciones al gobierno de la nación de tal ministro, embajador ó encargado de negocios manifestándole el deseo de separación y las naciones y los gobiernos no se dan por ofendidas cuando se les pide la remoción de un agente diplomático sino que la ejecutan.

Por estas razones, el que suscribe concluye pidiendo se deniegue el amparo al quejoso, como expresó al principio, haciendo presente que las circunstancias del presente caso son enteramente excepcionales por el mismo carácter dudoso con que aparece el expresado Calixto Perez, respecto de su nacionalidad; porque así pudiera convenirle; pero tratándose de una materia como la presente, no estando justificada completamente su naturalización en la República se le debe reputar extranjero, y acordada por la autoridad competente y en la forma que ordinariamente se acuerdan esa clase de determinaciones, y por consecuencia precisa que el amparo no procede en justicia.

México, Setiembre 30 de 1872.—
Francisco G. Moctezuma.

SENTENCIA del C. Juez de Distrito.

México, Octubre 24 de 1872.—Visto el presente juicio de amparo interpuesto por Calixto Perez á virtud de reputar violadas en su persona con la sentencia del ciudadano gobernador del Distrito que determinó su expulsión del país como extranjero pernicioso, las garantías individuales que otorgan los artículos 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución general; visto el informe rendido por dicha autoridad, las pruebas aducidas por el quejoso; lo pedido por la parte fiscal, y visto en fin, lo que debía, atendiendo á que en los juicios de amparo para el otorgamiento ó denegación de este, hay que investigar precisa é indispensablemente si todas ó alguna de las garantías invocadas ha sido violada, y considerando: Primero, que el art. 16 de la Constitución determina “que nadie sea molestado en su persona, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que fun-

de y motive la causa legal del procedimiento” y en el caso presente la determinación del ciudadano gobernador del Distrito no ha sido dictada con el carácter de tal autoridad sino con el de aprehensora en el delito de plagio, en cuya virtud y por ministerio especial de la ley tenía facultades para imponer penas propiamente tales, sin que sus resoluciones por razón de tal facultad, puedan calificarse en violación de la garantía consignada en el art. 16 ni por razón de que se dicte “una pena propiamente tal,” en violación de la otorgada en el 21 de la misma Constitución que también invoca el quejoso. Considerando: segundo, en cuanto á los artículos 18 y 19 que tratándose de llevar á efecto y cumplir una pena, la de expulsión del país, y habiéndose determinado en la sentencia pronunciada por el ciudadano gobernador que el quejoso quedase *en caja para su destino*, no puede decirse violada una ni otra de las garantías invocadas en ellos. Tercero: con respecto á los artículos 20 y 21, en cuanto al 19, que se refiere á las fórmulas y procedimientos en las causas criminales y á la libertad de defensa de que deben gozar los reos; que el quejoso no solo no ha comprobado los hechos á virtud de los cuales se han infringido las prevenciones de este artículo, pero ni aun mencionado tales hechos; y respecto al art. 21 debe hacerse igual apreciación, pues como ya se ha expresado, habiendo procedido el ciudadano gobernador, no como simple autoridad política, sino como judicial que le ha dado la ley de 18 de Mayo de 1871, no puede reputarse, en el caso, como violado tal artículo; Considerando: Cuarto, en cuanto al art. 22 que también se invoca como violado y dice “quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación, infamia y cualesquiera otras penas *inusitadas* ó *trascendentales*,” que la palabra *inusitada* debe ser relativa y que tratándose de me-

xicanos ó de individuos á quienes la misma Constitucion califique de tales, la expulsion del país es pena inusitada y aun podria decirse prohibida, pues como expresa el art. 33 "son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el art. 30," y á estos, á los extranjeros, será á quien podria expulsarse de él, y aun esto como facultad especial que la misma Constitucion encomienda al Gobierno y no á la autoridad judicial; y atendiendo, por último, á que ni la ley de 18 de Mayo de 1871 ni su reglamento, en virtud de la cual el ciudadano gobernador y como autoridad judicial dió su determinacion contra el quejoso Calixto Perez á fin de ser expulsado del país, designa entre las penas la expresada, y ademas el quejoso ha comprobado plenamente tener las calidades que determina el art. 30 de la Constitucion para reputarse mexicano, pues consta debidamente de autos haber contraído matrimonio con mexicana, tener una hija nacida en la República y de ese mismo matrimonio y sin que conste que el mismo quejoso como de origen español que es, haya hecho manifestacion alguna de querer conservar su carácter extranjero, pues muy al contrario, de la diligencia que para mejor proveer practicó este Juzgado, resulta no haber hecho tal manifestacion. Por estas consideraciones, se declara 1º que la Justicia de la Union ampara y protege á Calixto Perez contra su expulsion del país, como dictada por el ciudadano gobernador del Distrito, por violarse con ella y con relacion al art. 33 de la Constitucion general la garantía individual que otorga el art. 22 de la misma: 2º la Justicia de la Union no ampara ni protege al mismo quejoso con relacion á las garantías que conceden los artículos 16, 18, 19, 20 y 21, por no haberse efectuado con la expresada resolucion del citado gobernador violacion alguna de ellas. Hágase saber, remítase copia de

este fallo al "Diario Oficial" y "Semana-rio Judicial" y dévense los autos, previa citacion fiscal, á la Corte Suprema de Justicia para su revision. Lo decretó y firmó el C. juez 2º de Distrito, Lic. José María Canalizo. Doy fé.—*José María Canalizo.*—*Manuel M. de Chavero*, secretario.

Es copia. México, Octubre 28 de 1872.—*Manuel M. Chavero*, secretario.

EXECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 20 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta ciudad, y continuado ante el 2º por D. Calixto Perez contra el gobernador del Distrito, quien dispuso que el quejoso quedase en caja para su destino, pidiéndose al Ministerio de Relaciones pasaporte para expulsarlo de la República, como extranjero pernicioso, con cuya calidad fué ya expulsado en Febrero de 1868, habiendo vuelto á la República sin autorizacion; cuyo acto del ciudadano gobernador reputa Perez viola las garantías á que se refieren los artículos 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitucion Federal: y considerando: Que el Gobierno general, por conducto del Ministerio de Relaciones, en uso de la facultad que le concede el art. 33 de la Constitucion Federal, ordenó con fecha 1º de Febrero del año de 1868, que D. Calixto Perez fuera expulsado de la República como extranjero pernicioso; y que la disposicion del gobernador del Distrito, de que Perez se queja, se contrae á que la órden referida tenga efecto, de conformidad con lo que ordena el art. 101 de la Constitucion Federal, se decreta:

1º Que se revoca la sentencia pronunciada el 24 del mes próximo pasado por el Juzgado 2º de Distrito de esta ciudad, en la parte que declara: que la Justicia

de la Union ampara y protege á Calixto Perez, contra su expulsion del país.

2º Que se confirma la propia sentencia en la parte que dispone: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Calixto Perez, con relacion á las garantías que conceden los artículos 16, 18, 19, 20 y 21, por no haberse efectuado con la expresada resolucion del ciudadano gobernador, violacion alguna de ellas.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Ansa.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Noviembre 30 de 1872.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México, por Evaristo Cenobio Solano, contra el procedimiento del presidente municipal de Mixquic, por el cual fué consignado al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor dice: que el presente juicio de amparo fué interpuesto por el C. Evaristo Cenobio Solano, quejándose de que siendo vecino del pueblo de Miraflores fué aprehendido por el C. alcalde de Mixquic y remitido á esta capital donde se le dió de alta en la brigada de artillería, violándose en su persona las garantías que otorga la Constitucion en

su artículo 5º. Recibido el juicio á prueba, presentó un certificado del alcalde auxiliar de Miraflores, que dice es vecino del lugar, casado y con tres hijos. Tratándose de un juicio de amparo, este, conforme á la ley, solo puede intentarse, contra la autoridad ejecutora del acto; y aunque aparece que la consignacion fué hecha por el Prefecto de Nochimilco, quien remitió al quejoso por cuenta del contingente, aquella, sin la resolucion del Ministerio de la guerra que lo mandó dar de alta, ningunos efectos produciria, y por lo mismo solo debe calificarse este último acto por el Juzgado. El fundamento capital para la resolucion del Juzgado debe ser, si el ejecutivo estaba investido de facultades extraordinarias el 19 de Febrero último en que fué dado de alta en el servicio de las armas, y si estaban suspensas las garantías concedidas por el art. 5º de la Constitucion. La ley de 1º de Diciembre último, que prorogó al ejecutivo las facultades extraordinarias, suspendió entre otras las garantías que concede el art. 5º constitucional, lo cual pudo hacer legalmente el Congreso pues está en sus facultades, segun el art. 29 de la misma Constitucion. Es doloroso y temible para un país democrático que fija la libertad y seguridad de sus ciudadanos en la existencia de su Constitucion, que se les prive de las garantías que esta les otorga, por sus representantes; pero si estos ciudadanos deben pesar la gravedad y peligrosas consecuencias que envuelve una ley de facultades extraordinarias, dictada con apoyo de la Constitucion, es obligatoria su observancia. En nuestro caso, el ejecutivo podia tomar de leva obligando á los ciudadanos á servir en el ejército; pues bien, ¿qué varía el que esta se practicara por las autoridades del órden político ó militar? y como excepcion no podia admitirse el que no fuera el tomado de leva vecino